

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL
MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada Ponente

Auto - Ejecutivo	
EJECUTANTE	CONTENTO BPS S.A.
EJECUTADO	LUZ MARINA VILLADA MORALES
RADICADO	05266-31-05-001-2021-00301-01
TEMA	RESOLUCIÓN SE EXCEPCIONES
DECISIÓN	CONFIRMA AUTO.

Medellín, diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Esta Sala asume la competencia en esta instancia, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 2213, y cumplido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a desatar la apelación interpuesta contra el auto en que se DECLARÓ que el titulo ejecutivo complejo no está completo y por tanto no puede predicarse que la obligación actualmente sea exigible, y se ORDENÓ cesar la ejecución a favor de la sociedad CONTENTO BPS S.A., dentro del presente proceso ejecutivo laboral conexo, promovido por la sociedad **CONTENTO BPS S.A.**, contra la señora **LUZ MARINA VILLADA MORALES**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 044**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I.- ANTECEDENTES

Mediante proceso ejecutivo laboral, la CONTENTO BPS S.A., solicita se libre MANDAMIENTO DE PAGO a su favor, y en contra de la señora LUZ MARINA VILLADA MORALES por los siguientes conceptos:

“4.1. Librar el respectivo mandamiento ejecutivo por obligación de hacer, ordenando a la señora LUZ MARINA VILLADA MORALES, C. C. 43034109, que, en un plazo prudencial y perentorio de quince (15) días hábiles, inicie de manera efectiva el trámite de su pensión de vejez ante el fondo de pensiones (AFP PORVENIR S. A.) al que se encontraba afiliada para la fecha -05 de abril de 2019- en la que cumplió la edad requerida para el efecto, 57 años de vida.

4.2. Con fundamento en lo establecido en el numeral 3 del artículo 433 del C. G. P., desde ahora se solicita, en caso de que la señora LUZ MARINA VILLADA MORALES, C. C. 43034109, no cumpla con la referida obligación de hacer en el término fijado, autorizar a la demandante, sociedad CONTENTO BPS S. A., para que, en su calidad de empleador, inicie los correspondientes trámites encaminados a que la AFP PORVENIR S. A. le reconozca a aquella la respectiva pensión de vejez.

4.3. Condenar en costas y agencias en derecho a la demandada.

Mediante auto del 15 de junio de 2021 y su aclaración de fecha 23 de junio de 2021 (archivos PDF N° 10 y 13 del expediente digital), el JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO – ANT., decidió LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO por los siguientes conceptos:

“R E S U E L V E:

PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO, a favor de la sociedad CONTENTO BPS S. A., identificada con Nit. No. 811021864-9, y en contra de la señora LUZ MARINA VILLADA MORALES, identificada con cedula de ciudadanía No. 43034109, consistente en:

“5.4. LA TRABAJADORA se compromete a iniciar el trámite de pensión ante el fondo de pensiones al que se encuentra afiliado una vez cumpla la edad requerida.”

SEGUNDO: Se concede a la ejecutada el término de treinta (30) días, para cumplir con La Obligación De Hacer, consiste en

adelantar el trámite de pensión ante el fondo al que se encuentra afiliada, de no cumplirse con dicha obligación en el lapso antes indicado, se faculta a la sociedad CONTENTO BPS S. A., identificada con Nit. No. Nit.811021864-9, para iniciar el trámite pensional ante el fondo de pensiones PROTECCIÓN S.A. (...)."

La parte ejecutada LUZ MARINA VILLADA MORALES a través de su apoderada judicial, describió el traslado otorgado según consta en escrito visible a en el archivo PDF N° 14 del expediente digital, oponiéndose al mandamiento de pago librado en su contra, y formuló en su defensa las excepciones de fondo que denominó: *"CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA OBLIGACIÓN DE HACER; e INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN"*.

Señalando que sí ha dado cumplimiento a la obligación de hacer contraída con la sociedad CONTENTO BPS S.A., y prueba de ello es la demanda ordinaria laboral que hoy se encuentra tramitando contra COLPENSIONES y la AFP PROTECCIÓN S.A., con radicación 05001-31-05-025-2021-00318-00, tendiente a la declaratoria judicial de ineficacia del acto de afiliación y/o traslado al régimen de ahorro individual, y el consecuente retorno al régimen de prima media con prestación definida.

Dejando en claro que no se encuentra obligada a solicitar el reconocimiento y pago de una pensión de vejez ante la AFP PROTECCIÓN S.A., pues este régimen pensional es el menos favorable para sus intereses.

II. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE ALZADA:

En audiencia pública de resolución de excepciones celebrada el 8 de junio de 2022, la Juez Laboral del Circuito de Envigado – Ant., DECLARÓ que el título ejecutivo complejo no está completo y por tanto no puede predicarse que la obligación actualmente sea exigible, ORDENÓ cesar la ejecución a favor de la sociedad CONTENTO BPS S.A., absteniéndose de imponer condena en costas procesales en la respectiva instancia.

Como fundamento de su decisión, estimó la juez de primer grado que al estar la demandante válidamente afiliada al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de la AFP PROTECCIÓN S.A., el requisito de la edad no resulta válido para causar una pensión de vejez en dicho régimen, y así obligarse a iniciar los trámites de reconocimiento pensional, pues en dicho régimen la prestación económica de vejez depende de un capital ahorrado en la cuenta de ahorro individual, lo que significa que la obligación de hacer contenida en el acuerdo conciliatorio (numeral 5.4) cuya ejecución coactiva se depreca, no constituye una obligación actualmente exigible.

De otro lado, y solo en el hipotético caso de estimarse que la pensión de vejez es con garantía de pensión mínima, era necesario aportar los documentos que constituyen el título ejecutivo complejo, como lo es la certificación del régimen al cual se encuentra afiliada la ejecutada, e igualmente acreditar el cumplimiento de los requisitos legales para causar este tipo de pensión.

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La referida decisión fue recurrida en apelación, por la apoderada judicial de la parte ejecutante CONTENTO BPS S.A., quien expresó su inconformismo frente a lo resuelto por la juez de primer grado, al considerar que la ejecutada sí se comprometió a realizar una obligación de hacer (tramitar el reconocimiento pensional) una vez cumpliera una determinada edad, por lo que no era preciso analizar semanas de cotización, o la acumulación del capital necesario para financiar la pensión de vejez, como equivocadamente lo entendió la juez de primer grado.

También señaló el recurrente, que la propia ejecutada reconoció en su réplica que, a pesar de haber cumplido la edad, no ha iniciado los trámites pensionales, justificándose en el hecho de encontrarse adelantando un proceso de ineficacia del traslado, circunstancia que nada tiene que ver con lo pretendido en el proceso ejecutivo laboral, no existiendo prueba idónea del supuesto proceso ordinario laboral que la señora VILLADA MORALES dice estar tramitando,

acción judicial que pudo haberla adelantado mucho tiempo atrás, pero prefirió ser renuente y contumaz, aprovechando de la situación para quedarse más tiempo en la empresa. Motivos por los cuales solicita se revoque la decisión de primer grado, y en su lugar se ordene a la ejecutada a dar cumplimiento a la obligación, máxime que el título ejecutivo es simple, y no se requiere de otros documentos o requisitos adicionales.

Alegatos de conclusión:

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la apoderada judicial de la parte ejecutada, solicita se confirme la decisión de primera instancia, en cuanto declaró que el título ejecutivo complejo no está completo y por tanto no puede predicarse que la obligación actualmente sea exigible, precisando para ello que en contraste a lo esgrimido por el extremo activo recurrente, la señora Luz Marina Villada Morales actuó de buena fe y cumplió de forma oportuna con la obligación, tanto es así que ha adelantado todas las gestiones tendientes al reconocimiento de su pensión; esto es, la reclamación administrativa ante Colpensiones, los distintos derechos de petición que formuló y la demanda ordinaria laboral tendiente a la declaratoria judicial de ineficacia de la afiliación y/o traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

Desatará la Sala el recurso de alzada interpuesto, tomando en consideración los puntos de inconformismo que sustentan dicho recurso, al tratarse de una providencia susceptible del recurso de alzada, al tenor de lo dispuesto por el numeral 9° del artículo 65 del CPTSS.

La cuestión jurídica a resolver en esta instancia judicial, se circunscribe a desatar la apelación presentada a instancias de la parte ejecutante, sobre el auto interlocutorio a través del cual se resolvieron las excepciones en el proceso ejecutivo laboral, en la que se declaró que el título ejecutivo complejo estaba incompleto y que por tanto la obligación de hacer allí contenida y cuya ejecución forzada se persigue, no era actualmente exigible.

Sin embargo, la parte ejecutante señala que el título ejecutivo es simple, que no era necesario demostrar a que régimen pensional se encuentra afiliada la ejecutada, y si esta reúne o no las semanas o el capital necesario para causar una pensión de vejez, y que por ende la obligación de hacer contenida en el “ACTA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PREPENSIÓN” de fecha 10 de enero de 2018 satisface los requisitos del título ejecutivo a los que alude el art. 422 del CGP, es decir, que la obligación sea expresa, clara y actualmente exigible

Y por ello la problemática a resolver, será determinar si efectivamente si las pretensiones ejecutivas que reclama la parte ejecutante CONTENTO BPS S.A., están contenidas en un título ejecutivo que actualmente sea exigible.

Sea lo primero, -a efectos de resolver lo pertinente-, que un documento aducido como TÍTULO EJECUTIVO debe gozar de dos tipos de condiciones: formales y sustanciales.

Las **condiciones formales** consisten en que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación (i) sean auténticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme.

Las **condiciones sustanciales** exigen que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible.

Desde esta perspectiva, el título ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, o complejo, cuando la obligación está contenida en varios documentos. Las segundas, exigen que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona. Es decir,

que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser **clara, expresa y exigible**.

Conforme a la jurisprudencia nacional, el “*que la obligación sea expresa, quiere decir que se encuentre debidamente determinada, especificada y patente. Que sea clara: Esto es, que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (crédito) como sus sujetos (acreedor y deudor). Que sea exigible: Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido esta*” (Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 22 de junio de 2001, Consejero Ponente Ricardo Hoyos Duque, Radicado 44001-23-31-000-1996-0686-01(13436).

Y en esos precisos términos se encuentra redactado el concepto de TÍTULO EJECUTIVO, en nuestro estatuto procesal, el art. 422 del Código General del Proceso, veamos:

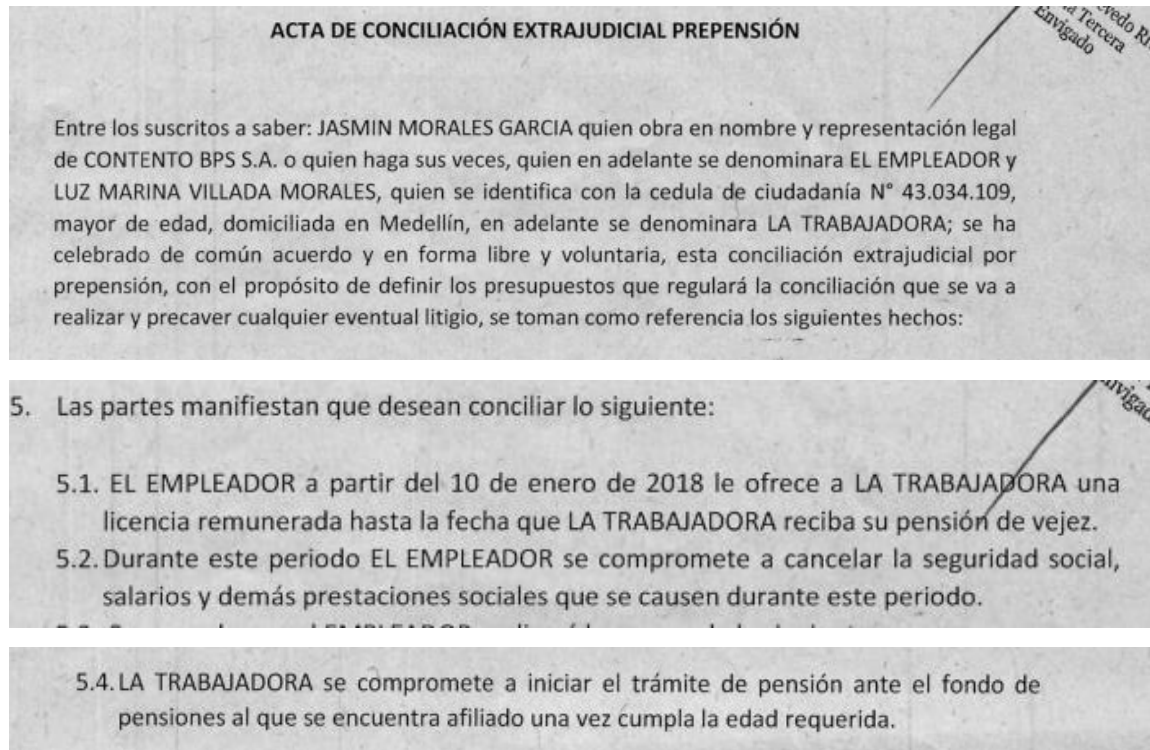
“ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. *Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.*”

CASO CONCRETO

A efectos de establecer cuál es la obligación de hacer a la que supuestamente se comprometió la ejecutada LUZ MARINA VILLADA MORALES en el documento denominado “ACTA DE CONCILIACIÓN

EXTRAJUDICIAL PREPENSIÓN” de fecha 10 de enero de 2018, visible a folios 1 al del archivo PDF N° 02 (expediente digital).

Para tal efecto, la Sala incorpora algunos de sus apartes, veamos:



Observa la Sala que efectivamente las partes celebraron un acuerdo conciliatorio privado y formalizado ante la Notaria Tercera del Circulo de Envigado – Ant., mediante el cual la sociedad CONTENTO BPS S.A. en su calidad de empleador se comprometió a otorgarle una licencia remunerada (salarios, prestaciones sociales, y aportes a seguridad social) a la señora LUZ MARINA VILLADA MORALES hasta el momento en que este empiece a percibir una pensión de vejez.

Por su parte la señora LUZ MARINA VILLADA MORALES en su calidad de trabajadora, se comprometió a iniciar el trámite de pensión ante el fondo de pensiones al que se encontrare afiliada, una vez cumpliera la edad requerida.

Estudiada con detenimiento la obligación contraída por la demandante en el numeral 5.4 del acuerdo conciliatorio, estima la Sala que la misma no satisface las exigencias del título ejecutivo a las que alude el art. 422 del Código General

del Proceso, pues la obligación de hacer allí contenida reviste una ambigüedad de tal magnitud que no puede ser exigida coactivamente mediante la acción ejecutiva laboral.

Lo anterior, toda vez que la señora VILLADA MORALES se comprometió a iniciar unos trámites pensionales, una vez cumpliera la edad requerida, como si se tratara de una pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida, donde dicha prestación económica se causa al cumplimiento de unos requisitos de edad y semanas cotizadas¹.

Y según se advierte en el archivo PDF N° 19 incorporado al expediente digital, la ejecutada LUZ MARINA VILLADA MORALES se encuentra afiliada a la AFP PROTECCIÓN S.A., desde el año 1999, y al ser este un fondo privado de pensiones, el simple cumplimiento una determinada edad, no constituye un requisito sine qua non para causar una pensión de vejez, veamos:

Protección

Medellín, 20 de noviembre de 2019

No. de Radicado:
CAS-5221188-W0C2K0

Señor(a):
LUZ MARINA VILLADA MORALES
Carrera 43B No. 16- 95 Oficina 1901
Medellin, Antioquia

Asunto: Respuesta Derecho de petición

Reciba un cordial saludo de Protección S.A.

De manera atenta damos respuesta al derecho de petición recibido en nuestra administradora, mediante el cual solicita copia del formulario de afiliación, copia de formatos de la asesoría brindada, información de ventajas del RPM, proyecciones pensionales, información de monto de ahorro mínimo, variables de rentabilidad de capital, aumento de ahorro por probabilidad de vida en el RAIS, información de las modalidades de pensión en el RAIS, lo anterior respecto al traslado de Régimen que se realizó.

Al respecto nos permitimos informarle que, realizando las verificaciones en nuestro sistema, evidenciamos que la señora LUZ MARINA VILLADA MORALES identificada con CC 43034109, efectuó la solicitud de traslado de régimen el 17 de marzo del 1999, pasando de Colpensiones (el cual hace parte del Régimen de Prima Media – RPM), a Protección S.A (perteneciente al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS).

1 Art. 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 9° de la Ley 797 de 2003.

Se resalta que en el régimen de capitalización que administra la AFP PROTECCIÓN S.A., la pensión de vejez se causa a cualquier edad, siempre y cuando el afiliado logre acumular el capital necesario para financiar la prestación económica, así:

“ARTÍCULO 64. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ. Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta Ley, reajustado anualmente según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando a éste <sic> hubiere lugar.

(...)”.

Significa lo anterior, que a la ejecutada LUZ MARINA VILLADA MORALES no le resulta exigible iniciar unos trámites pensionales al cumplimiento de una determinada edad, pues el régimen pensional al que se encuentra afiliada no permite este tipo de reconocimientos pensionales.

Y en el hipotético caso que se entendiere que la obligación de hacer, consistía en adelantar el trámite para el reconocimiento y pago de una pensión de vejez con garantía de pensión mínima a la que alude el art. 65 de la Ley 100 de 1993, estaríamos ante un TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO, como bien lo advirtió la juez de primer grado, pues además del acuerdo conciliatorio de fecha 10 de enero de 2018 aportado con la demanda ejecutiva, se requeriría demostrar que la señora VILLADA MORALES al momento de cumplir los 57 años de edad, ya tenía en su haber un mínimo de 1.150 semanas de cotización, y no había logrado reunir el capital necesario para causarla.

Corolario de lo anterior, el título ejecutivo presentado ante la jurisdicción ordinaria laboral por la parte ejecutante CONTENTO BPS S.A., no resulta claro, ni exigible, pues es precisamente esa imprecisión y ambigüedad en la redacción del numeral 5.4 del acuerdo conciliatorio de fecha 10 de enero de 2018, lo que impide su exigibilidad, y por ello era deber del juez de primer grado declarar la carencia de este requisito legal de “exigibilidad”, y ordenar la cesación de la ejecución forzada contra la señora LUZ MARINA VILLADA MORALES, haciendo uso del control de legalidad al que alude el art. 132 del Código General del Proceso.

Costas en esta instancia a cargo de la parte ejecutante y a favor de la parte ejecutada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 365 del Código General del Proceso, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de \$500.000, equivalente a ½ SMLMV para el año 2022.

V. D E C I S I Ó N

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral,

R E S U E L V E:

Primero: CONFIRMAR el auto interlocutorio objeto de apelación de fecha 18 de abril de 2022, proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado – Ant., según lo expuesto en precedencia.

Segundo: Costas en esta instancia a cargo de la parte ejecutante y a favor de la parte ejecutada, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de \$500.000, equivalente a ½ SMLMV para el año 2022.

Tercero: Se ordena notificar lo resuelto en **ESTADOS** virtuales y la devolución del expediente al juzgado de origen.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

(Sin firma por ausencia justificada)

LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° **183 del 11 de octubre de 2022.**

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>